CARMEN COLMENAR MALLÉN
Dret Romà.
Universitat Jaume I (Castelló) (Spain)

THE IMPACT IN CERTAIN AREAS OF THE JUSTICE ADMINISTRATION IN SPAIN AFTER THE DECLARATION OF THE ALARM STATE BY COVID-19

EL IMPACTO EN DETERMINADOS ÁMBITOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPAÑA TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19

Abstract: This work seeks to raise some reflections on the impact that the declaration of the alarm state by COVID-19, has had in Spain in very specific areas of the Justice administration (certain criminal proceedings, victims of crime, etc.).

Keywords: alarm state, Civil Registry, suspension of procedural deadlines, essential services.

Resumen: Este trabajo busca plantear algunas reflexiones sobre las repercusiones que la declaración del estado de alarma por del COVID-19, el 14 de marzo de 2020, ha tenido en España en ámbitos muy concretos de la Administración de Justicia (determinados procedimientos penales, las víctimas de delitos, etc.).

Palabras clave: estado de alarma, Registro Civil, suspensión de plazos procesales, servicios esenciales.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende estudiar el alcance y repercusión que la declaración del estado de alarma en España motivado por terrible la pandemia del COVID-19 ha supuesto en determinados aspectos de la Administración de Justicia de nuestro país, deteniéndonos aspectos de procedimientos judiciales y la necesaria adaptación de éstos a las nuevas circunstancias, la atención a las víctimas del delito, la importante labor que los Registros civiles españoles han llevado a cabo de forma encomiable para el cumplimiento de un cometido sin precedentes como consecuencia de la grave crisis sanitaria, así como los reajustes a los que su normal funcionamiento a tenido que ser sometido. En la elaboración de este trabajo analizamos normas y resoluciones que se han dictado por organismos estatales, tanto de ámbito gubernamental como judicial (Consejo General del Poder Judicial), Fiscalía General de Estado, y resoluciones de varias de nuestras Comunidades Autónomas, si bien dada la ingente cantidad de resoluciones dictadas durante todo el período del estado de alarma hemos considerado acotar nuestro trabajo y centrarnos en algunos aspectos contenidos en ellas, modificaciones de procedimientos civiles, especialmente en el ámbito de familia y menores. Dejamos al margen el estudio las reformas introducidas en derecho mercantil, laboral o administrativo, no porque no sean de suficiente entidad e interés, sino a fin de no exceder la de extensión de este trabajo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS. EL ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA

En primer lugar, y sin pretender efectuar un análisis constitucionalista de la cuestión¹, antes de comenzar con el análisis

¹ A. ABA CATOIRA, "El estado de alarma en España", en *Teoría y Realidad Constitucional*, UNED, 2011 nº 28, p. 305-334.

de la materia objeto de este trabajo consideramos adecuado mencionar la normativa española que permite la declaración del estado de alarma, causas para su declaración y procedimiento.

El art. 116.2 de la Constitución Española (CE), legitima al Gobierno para la declaración del estado de alarma mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, con una duración máxima de quince días, en el que determinará el ámbito territorial al que extiende sus efectos y sujeta al Gobierno a la obligación de dar cuenta al Congreso de los Diputados, ya que sin su autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

La CE no precisa los supuestos para declarar cada uno de los estados excepcionales, por lo que esta tarea debe acometerla el legislador², lo que no ha estado exento de crítica por parte de la doctrina, pero como Berdugo de la Torre, Fernández Segado³ y Villalón defienden que resulta imposible establecer todos los supuestos de hecho que fundamentan la declaración de un estado excepcional y la formulación ha de hacerse en términos genéricos⁴. Pérez Royo⁵ puntualiza que el legislador podía optar por un criterio “gradualista” que supone contemplar una emergencia única en la que los tres estados de más o menos intensidad serán los escalones sucesivos en respuesta a la emergencia o por un criterio “diferenciador” que prevé la declaración de tres posibles estados configurados como tres instituciones diferentes, en cuanto cada uno de ellos, estará pensado para un tipo de emergencia distinto,

² A. ABA CATOIRA, “El estado de alarma en España”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, UNED, 2011 nº 28, p. 325.

³ F. FERNÁNDEZ SEGADO, “El estado de excepción en el Derecho Constitucional español”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1977, p. 14-24.

⁴ A. ABA CATOIRA, “El estado de alarma en España”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, UNED, 2011 nº 28, p. 325.

⁵ J. PÉREZ ROYO, *Curso de Derecho Constitucional*, Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 1042

por lo que no se pasa de uno a otro en orden de graduación sino que cada uno de ellos tiene su régimen de declaración, y añade que es este último criterio por el que ha optado nuestro legislador⁶.

La Ley Orgánica (L.O.) 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (B.O.E. de 05/06/1981, referencia BOE-A-1981-12774) desarrolla el art. 116.1 CE, y en los arts. 1 a 3 (Capítulo I) establece las disposiciones comunes a los estados de alarma excepción y sitio y el Capítulo II regula el estado de alarma.

El artículo 4 de la L.O. 4/1981 precisa las alteraciones graves de la normalidad por las que el Gobierno pueda declarar el estado de alarma: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud (art 4 a); crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves (art. 4 b); situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad (art. 4 d); y paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la CE, cuando concorra alguna de las otras circunstancias o situaciones contenidas en este art. (art. 4 c).

Aba Catoira sostiene que el estado de alarma se aplica ante una emergencia de naturaleza no política, pues el legislador lo regula como la respuesta del Estado ante una catástrofe natural o ecológica⁷. Para Fernández Segado⁸ el estado de alarma no

⁶ A. ABA CATOIRA, "El estado de alarma en España", en *Teoría y Realidad Constitucional*, UNED, 2011 nº 28, p. 325-326.

⁷ A. ABA CATOIRA, "El estado de alarma en España", en *Teoría y Realidad Constitucional*, UNED, 2011 nº 28, p. 326

⁸ F. FERNÁNDEZ SEGADO, "Los estados de alarma, excepción y sitio", *Revista de Derecho Político*, Madrid, UNED, P.83-116, en <https://doi.org/10.5944/rdp.11.1981.8119> (último visionado 27 de julio de 2020), 1981, p. 95.

es una fase previa al de excepción, estamos más bien ante una situación basada en la necesidad de proteger a la sociedad frente a una suma de riesgos, procedentes de hechos naturales, o de circunstancias sociales, ante los que se encuentra en grave riesgo la seguridad o la vida de las personas, y resulta difícil el mantenimiento de las condiciones necesarias para que la comunidad pueda desenvolver su vida colectiva normal.

En España desde la entrada en vigor de la CE de 1978 se ha decretado el estado de alarma dos veces, si bien por circunstancias y motivos muy diferentes.

La primera vez fue mediante el RD 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se decretaba el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo (B.O.E. núm. 295, de 4 de diciembre de 2010), que afectaba a la totalidad del territorio nacional, pero el ámbito subjetivo de aplicación recaía únicamente en los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA. Esta declaración del estado de alarma vino motivada por las circunstancias extraordinarias que concurrían por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia del abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo que impedía el ejercicio del derecho a la libre circulación de los españoles reconocido en el art. 19 de la Constitución Española, y determinaban la paralización de un servicio público esencial como lo es el servicio de transporte aéreo. Aquella declaración del estado de alarma se efectuó por RD 1717/2010, de 17 de diciembre, al amparo del art. 4.c) de la LO 4/1981, de 1 de junio, y se prorrogó por RD 1673/2010 hasta el 15 de enero de 2011.

La situación que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma por segunda vez mediante el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma ha sido para

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevara el 11 de marzo la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional y a la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a la situación de una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el elevado número de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para sus derechos. El RD 463/2020 se ampara en el art. 4, apartados b) y d) de la LO 4/1981, de 1 de junio, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Esta declaración afecta a todo el territorio nacional y a la totalidad de la ciudadanía. El RD 463/2020, de 14 de marzo establece una duración de quince días naturales (art. 3) y entre otras cuestiones establece la limitación de la libertad de circulación de las personas (art. 7), la posibilidad de efectuar requisas temporales por parte de las autoridades (art. 8.1), dispone medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación (art. 9), en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales (art. 10), en los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas (art. 11), se adoptan medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional (art. 12), el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública (art. 13), en materia de transportes (art. 14), medidas para garantizar el abastecimiento alimentario (art. 15), el tránsito aduanero (art. 16), el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural (art. 17), se contienen previsiones dirigidas a operadores críticos de servicios esenciales

(art. 18), y se establece un régimen sancionador en caso de incumplimiento de los términos del estado de alarma (art. 20).

El RD 463/2020, ha sido objeto de sucesivas prórrogas (un total de 6) mediante distintos RD: R.D. 476/2020, de 27 de marzo; R.D. 487/2020, de 10 abril; R.D. 492/2020, de 24 de abril; R.D. 514/2020, de 8 de mayo, que contiene previsiones para el procedimiento para la desescalada; R.D. 537/2020, de 22 de mayo y R.D. 555/2020, de 5 de junio, que prorroga el estado de alarma hasta el 21 de junio de 2020, momento del fin del estado de alarma.

3. SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PROCESALES

La grave situación generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, a nivel mundial, supone un reto para tanto para las autoridades de todos países afectados como para sus ciudadanos. Nuestro sistema judicial se enfrentaba a una situación inédita que requería de la adopción de medidas extraordinarias de gran calado, que ya se introducen en el propio RD 463/2020, y que fueron objeto de modificación por: Real Decreto-Ley (RDL) 10/2020, de 29 de marzo; RDL 11/2020, de 31 de marzo y RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. La suspensión de plazos procesales se introduce en la disposición adicional (DA) segunda del RD 463/2020, de 14 de marzo donde establece la suspensión de los términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales y el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, sus prórrogas. En la DA

tercera establece la suspensión de los plazos administrativos y en la cuarta la suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de su Comisión Permanente, ha ido adoptando acuerdos desde el 11 de marzo de 2020.

La suspensión de plazos procesales en los términos fijados en la DA segunda del RD 463/2020, de 14 de marzo supone un hecho sin precedentes en nuestro Derecho y destaca la trascendencia de la medida acordada que suponía una paralización, casi total de nuestro sistema judicial tal como está configurado. No se permite la presentación de ningún escrito procesal, salvo de forma telemática los que sean urgentes e inaplazables, pues ignorar estas prohibiciones y limitaciones supone contrariar la finalidad de la declaración del estado de alarma (CGPJ, acuerdo de 18 de marzo de 2020).

En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de *habeas corpus*, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

En el resto de órdenes jurisdiccionales no se interrumpirán, entre otros, la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el art. 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil o la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el art. 158 del Código Civil.

El 11 de mayo de 2020 el CGPJ aprueba los criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación de la actividad judicial. El 23 de mayo de 2020 en sesión extraordinaria

acuerda alzar la suspensión de plazos y actuaciones procesales establecida en la DA segunda del RD 463/2020 a partir del 4 de julio. La reanudación del cómputo de los plazos y la ampliación de los plazos para recurrir se reiniciará desde esa fecha en los términos previstos en el art. 2 del RDL 16/2020, y a partir del 1 de junio se alzará la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos establecida en la DA tercera del R.D. 463/2020.

En el momento en el que produzca el alzamiento de la suspensión de los plazos y actuaciones procesales se plantea Sospedra Navas⁹, si en los supuestos de la DA segunda del RD 463/2020 ha de optarse por la regla del reinicio de plazo o por la de la reanudación, para acabar concluyendo que el art. 2 del RDL 16/2020 al prescindir de la opción de reanudación del plazo o término procesal, establecida inicialmente, opta con carácter general por el reinicio del plazo y para los supuestos de alzamiento de los plazos de prescripción y caducidad de la DA tercera del RD 463/2020, rige la norma de la reanudación y no del reinicio, de manera que su cómputo debe reanudarse al desaparecer la causa de suspensión.

Una vez se levante la suspensión de plazos y hasta el 31 de Agosto de 2020 se desarrollarán en Juzgados y Tribunales, preferentemente, aquellas actuaciones judiciales relativas a asuntos declarados urgentes o que hubieran sido suspendidos y de forma telemática siempre que se disponga de los medios técnicos para ello y se asegure la confidencialidad o publicidad, cuando una u otra vengan exigidas por las normas.

⁹ F. J. SOSPEDRA NAVAS, "Dossier. Impacto jurídico del COVID 19: Análisis de las medidas de reactivación de la justicia (RD-ley 16/2020)", en <https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf> (último visionado el 19 de julio de 2020), 2020, p. 9.

El art. 1 del RDL 16/2020 declara hábiles, por ser urgentes a estos efectos todas las actuaciones judiciales, los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020, exceptuándose de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales y recomienda limitar en lo posible la celebración de vistas orales en tales fechas, ante la posibilidad que se produzcan numerosas suspensiones, sin perjuicio de la celebración de aquellas vistas orales cuya urgencia venga establecida con anterioridad en las leyes procesales.

4. PROCEDIMIENTO SUMARIO ESPECIAL EN MATERIA DE FAMILIA

El CGPJ, en sus acuerdos de 19 y 20 de marzo de 2020, establece que no se encuentran entre las actuaciones esenciales cuya realización deba asegurarse las medidas adoptadas judicialmente en los procedimientos de familia en relación con el régimen de custodia, visitas y estancias de los menores sujetos a la patria potestad, y en particular, su ejecución.

Ahora bien, añade el CGPJ que la necesidad de preservar la salud de los hijos y de los progenitores y de la salud pública, en general, puede imponer, según las circunstancias, la modulación o la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias, alterando o suspendiendo la ejecución de las medidas acordadas, o determinando una particular forma de llevarlas a efecto, se opta en primer lugar por el consenso entre los progenitores y en su defecto el juez o magistrado adoptará la decisión que proceda, en función de las circunstancias del caso, acerca de la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias, en garantía de la finalidad tuitiva del RD en

la que tendrá en cuenta los casos en los que esté establecido para el cumplimiento de los regímenes de visitas los Puntos de Encuentro Familiar y recursos equivalentes que se hayan visto afectados en su funcionamiento ordinario como consecuencia de la aplicación de las medidas del RD 463/2020).

Pérez Martín¹⁰, efectúa un análisis en relación a los criterios unificadores de actuación y pautas conjuntas de aplicación que han ido adoptando las Distintas Juntas de Jueces en relación a las visitas en Puntos de Encuentro, intersemanales, de fin de semana, otros regímenes especiales, visitas en periodos vacaciones, con abuelos,...).

Durante el confinamiento, en la práctica se han planteado muchos problemas en relación al cumplimiento de régimen de visitas y otras cuestiones para con los menores y así ha sido puesto de manifiesto por parte de la doctrina^{11 12}. De hecho, el RDL 16/2020, expone que resulta preciso configurar procedimientos que permitan sustanciar con celeridad pretensiones con origen directo y fácilmente identificable en la crisis sanitaria, como el reequilibrio del régimen de visitas o custodia compartida por los períodos no disfrutados por las limitaciones de la libertad deambulatoria u otras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, y en su artículo 3 configura una procedimiento

¹⁰ A. J. PÉREZ MARTÍN, "Custodia, visitas y otras medidas en tiempos de coronavirus", *Revista de Derecho de Familia*, en <https://elderecho.com/perez-martin>; <https://lefebre.es/> (último visionado 27 de julio de 2020), 2020, p. 45.

¹¹ F. J. SOSPEDRA NAVAS, "Dossier. Impacto jurídico del COVID 19: Análisis de las medidas de reactivación de la justicia (RD-ley 16/2020)", en <https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf> (último visionado el 19 de julio de 2020), 2020, p. 14-15, 17.

¹² A. J. PÉREZ MARTÍN, "Custodia, visitas y otras medidas en tiempos de coronavirus", *Revista de Derecho de Familia*, en <https://elderecho.com/perez-martin>; <https://lefebre.es/> (último visionado 27 de julio de 2020), pp. 1-10.

especial y sumario en materia de familia que se tramitará durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, y que se regula en los artículos 3 a 5 del este RDL se va a ocupar de demandas que como consecuencia de la aplicación del RD 463/2020, o las circunstancias vengan motivadas por la crisis del COVID-19 versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente; las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; así como las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos. La competencia para conocer de estas demandas viene establecida en el art. 4 del Real Decreto-Ley y su tramitación se efectuará de conformidad con los trámites del art. 5 del Real Decreto-Ley.

5. FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS TELEMÁTICOS

En España la Fiscalía General del Estado con el Decreto de 11 de marzo de 2020 fue pionera en el fomento de la utilización de medios telemáticos de los Fiscales (teletrabajo, videoconferencias, etc.) y evita la concurrencia diaria de la totalidad de la plantilla en los diversos centros de trabajo con la finalidad de preservar la salud de sus componentes, se suspenden temporalmente las visitas e inspecciones de los fiscales a residencias de mayores,

de personas con discapacidad, a centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, u otras visitas de similar naturaleza en la medida en que resulte absolutamente imprescindible.

La Comisión Permanente del CGPJ en la sesión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2020, en similar sentido, precisa que, tanto en los servicios de juzgado de guardia en todos los partidos judiciales de España, se realizarán, siempre que sea posible, mediante videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación bidireccional segura de datos o si fuera necesario de imagen y/o sonido a los efectos de evitar traslados de detenidos, profesionales u otras personas a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias que hubieran de realizarse.

De *facto*, en las actuaciones propias de los Juzgados en funciones de guardia los fiscales han intervenido a través de sistemas de videoconferencia sin actividad presencial en la Sala en la que se efectuara la declaración, ni de perjudicado/a ni de detenidos. Tampoco los detenidos han sido trasladados a las dependencias judiciales, sino que se les ha tomado declaración por videoconferencia desde los mismos centros policiales de detención con los que se ha conectado a través de sistemas telemáticos, y en la Comunidad Valenciana mediante el sistema Cisco Webex, se está implantando paulatinamente en otros servicios de la Administración de Justicia, como las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito a fin de prestar apoyo y colaboración de forma virtual en las tareas propias de su competencia a los órganos judiciales.

6. SERVICIOS ESENCIALES

La Comisión Permanente del C.G.P.J. en sesión extraordinaria celebrada el 14 de marzo (en la misma línea que la Fiscalía General del Estado) establece que debe configurarse como actuación esencial, cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable; Internamientos urgentes del artículo 763 de la LEC; la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 CC.; los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan y en particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores; el Registro Civil, que en particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 CC. (matrimonios en peligro de muerte: no requieren para su celebración la previa tramitación del expediente matrimonial, pero sí exigirán la presencia de dos testigos mayores de edad, y en caso de grave enfermedad dictamen médico que haga constar sobre la capacidad para prestar consentimiento y la gravedad de la situación); las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, levantamientos de cadáver, entradas y registros; cualquier actuación en causa con presos o detenidos; actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, ...

En la misma línea las Comunidades Autónomas (CCAA) con competencias transferidas en materia de Justicia han adoptado resoluciones en materia de servicios esenciales; así enumeramos las que han dictado algunas CCAA y nos detendremos con algo más de detalle en la regulación que la Comunidad Valenciana.

Algunas de las CCAA que han dictado resoluciones en materia de servicios esenciales son: Asturias, (16 de marzo de

2020); Canarias (15 de marzo de 2020); Cantabria (14 de marzo 2020); Galicia (15 de marzo de 2020); La Rioja (15 de marzo de 2020); y Gobierno Vasco (15 de marzo de 2020).

En la Comunidad Valenciana, en virtud de Resolución de fecha 15 de marzo de 2020, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia con motivo del COVID-19 de acuerdo con la *Resolución del Secretario de Estado de Justicia*, de fecha 14 de marzo de 2020 reproduce prácticamente los mismos que había indicado el CGPJ, si bien respecto al orden Jurisdiccional Social la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, por la Comisión Autonómica para el seguimiento del COVID-19 se acuerda interpretar que deberá entenderse que quedan exceptuados de la suspensión de actuaciones y vistas en los Juzgados de lo Social únicamente las relativas a las modalidades de conflicto colectivo y tutela de derechos fundamentales, medidas cautelares y trámites de ejecución dimanantes de la aplicación del Estado de Alarma, y la completa con la Resolución del Director General de reformas democráticas y de acceso a la justicia por la que modifica y complementa la resolución de la dirección general de reformas democráticas y acceso a la justicia, de 16 de marzo, sobre medidas organizativas para la prestación de los servicios de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito y de la Oficina de denuncias y asistencia a las víctimas de violencia de género con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de 09/04/2020, considerándolas como un servicio esencial, ya que las víctimas del delito tienen que recibir una atención adecuada y han de obtener respuesta a sus demandas de asistencia, particularmente las mujeres víctimas de violencia de género y otras personas especialmente vulnerables.

Debe ponerse de manifiesto que si al inicio de este apartado no hemos mencionado el RD 463/2020 en materia de servicios esenciales es porque la enumeración taxativa la encontramos en el RDL 10/2020, de 29 de marzo, de modificación del RD 463/2020 que en su anexo incluye hasta 25 apartados de sectores calificados como esenciales, y en el punto 14 incluye “las que presten los servicios relacionados con la protección y atención a las víctimas de violencia de género”, que la Comunidad Valenciana ya había considerado como servicio esencial en virtud de la resolución de 16 de marzo anteriormente mencionada, anticipándose así a la normativa estatal.

7. EL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL EN TIEMPOS DEL COVID-19

El Registro civil, declarado como servicio esencial, deberá prestar una atención permanente durante las horas de audiencia.

La evolución del virus supuso un significativo incremento en el número de fallecidos y con la finalidad de dar un destino final a los cadáveres con la mayor agilidad posible y para evitar su acumulación en hospitales o tanatorios, sin guardar el debido respeto para con los fallecidos añadido al dolor y sentimiento de impotencia de las familias por no poder despedirse de ellos, así como con la sensación de desolación en el personal sanitario, lleva al Ministerio de Sanidad a dictar la Orden SND/272/2020, de 21 de marzo (en coordinación con las CCAA, el CGPJ y las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria en virtud de la Orden SND/261/2020 de 19 de marzo), por la que se suspende el plazo de 24 horas que la vigente Ley del Registro Civil exige entre la defunción y el enterramiento, y complementa su art. 87 que prevé que, en tiempo de epidemia, de existir temor fundado de

contagio o cuando concurren otras circunstancias extraordinarias, los preceptos sobre defunción y enterramiento de la Ley pueden verse alterados. y se establece durante la vigencia del estado de alarma una ampliación del horario del Registro Civil a todos los días de la semana para la inscripción de las defunciones y expedición de las licencias de enterramiento en horario habitual de mañana y de 17 a 20 h. El horario de trabajo del Registro civil se restablece por Resolución del Ministerio de Justicia de 29 de mayo, cuando el número de fallecidos va descendiendo.

8. CONCLUSIONES

- ⇒ Ante la grave situación de grave crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, los estados y los ciudadanos han tenido y siguen enfrentándose a una situación sin precedentes que ha requerido decisiones de carácter drástico por parte de las autoridades con alcance nunca visto ni en nuestra sociedad ni en nuestro ordenamiento jurídico.
- ⇒ Por primera vez en nuestra historia se suspenden plazos procesales y administrativos de forma generalizada, que auguran un incremento en la carga de trabajo en la Administración de Justicia, ya de por sí saturada.
- ⇒ Se configuran una serie de servicios esenciales, como los Registros civiles cuyo horario se amplía para poder afrontar el incremento de certificados de defunción y de licencias a tramitar, llevando a cabo una labor fundamental.
- ⇒ Se regulan procedimiento sumarios preferentes, entre otros, en materia menores y familia modificando la legislación procesal a fin solventar las situaciones de conflicto en materia de menores que se hayan podido generar por la crisis del COVID-19.

- ⇒ Queda patente que la Administración de Justicia, en todos sus ámbitos, al igual que el conjunto de la sociedad, ha tenido que adaptarse de forma abrupta a una situación de magnitudes insospechadas y en definitiva reinventarse introduciendo en su funcionamiento la generalización de medios telemáticos a marchas forzadas con carácter preferente para la realización de multitud de actos judiciales.

BIBLIOGRAFÍA:

- ABA CATOIRA, A. nº 28, “El estado de alarma en España”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, UNED, 2011, p. 305-334.
- FERNÁNDEZ SEGADO, F., “El estado de excepción en el Derecho Constitucional español”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1977, p. 14-24. ISBN 978-84-7130-206-9.
- FERNÁNDEZ SEGADO, F., “Los estados de alarma, excepción y sitio”, *Revista de Derecho Político*, Madrid, UNED, 1981, P.83-116, en <https://doi.org/10.5944/rdp.11.1981.8119> (último visionado 27 de julio de 2020).
- PÉREZ MARTÍN, A.J., “Custodia, visitas y otras medidas en tiempos de coronavirus”, *Revista de Derecho de Familia*, 2020, en <https://elderecho.com/pérez-martin>; <https://lefebre.es/> (último visionado 27 de julio de 2020).
- PÉREZ ROYO, J., *Curso de Derecho Constitucional*, Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 1042. ISBN 978-84-9123-561-3.
- SOSPEDRA NAVAS, F.J., “Dossier. Impacto jurídico del COVID 19: Análisis de las medidas de reactivación de la justicia (RD-ley 16/2020)”, en <https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-covid-19-rd-ley-16-2020.pdf> (último visionado el 19 de julio de 2020).